



7 de noviembre de 2017

VÍA CORREO ELECTRÓNICO:

comisiondedesarrolloeconomico@camaraderepresentantes.org

Hon. Víctor Parés - Otero
Presidente
Comisión de Desarrollo Económico, Planificación,
Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía
Cámara de Representantes de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

P. del S. 99: Para crear la “Ley del Sistema de Alertas Móviles de Emergencia de Puerto Rico”; establecer la obligación de las compañías de telefonía móvil de implementar un sistema de alertas de emergencia para dispositivos móviles en Puerto Rico; establecer la facultad de reglamentación; y para otros fines relacionados.

P. de la C. 1103: Para crear la “Ley de Avisos de Alertas Inalámbricas para Usuarios de Playas y Áreas Costeras ante Condiciones Marítimas de Peligro en Puerto Rico”; ordenar a los proveedores comerciales de servicios móviles a adoptar los mecanismos necesarios para emitir dichas advertencias; delinear el alcance de la reglamentación; y para otros fines relacionados.

Estimado señor Presidente:

I.

Reciba un cordial saludo.

El 3 de noviembre de 2017 esta Honorable Comisión nos cursó una invitación para comparecer y expresar nuestra opinión en torno a la medida de referencia. A los fines de atender dicho requerimiento, comparecemos en representación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto). Luego de evaluar la medida, procedemos a expresarnos en el marco de nuestras competencias.

II.

El P. del S. 99 propone crear el Sistema de Alertas Móviles de Emergencia (AME), el cual permitirá el envío de mensajes de alerta a teléfonos y dispositivos móviles en toda la jurisdicción de Puerto Rico. Se dispone que será obligación de todo proveedor de servicios de telefonía móvil en Puerto Rico ofrecer este servicio libre de costo a todos sus usuarios, subscriptores, teléfonos y dispositivos en Puerto Rico, sean subscriptores o usuarios del servicio de voz o de data, independientemente

del lugar de origen del servicio y del estatus de pago del cliente o suscriptor con el proveedor del servicio de telefonía móvil. Se añade que la Ley no despojará a ningún proveedor de los derechos u obligaciones que éstos tengan conforme a la Ley Federal conocida como “Warning, Alert and Response Network Act” (WARN).

El propósito principal de esta medida es lograr que, de una manera rápida y eficiente, se puedan diseminar mensajes de alerta a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para proteger vida y propiedad en casos de situaciones de emergencia. Durante la consideración de esta medida en el Senado, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones expresó su posición a favor de su aprobación. En esencia, indicó que estos sistemas, como bien dice la Exposición de Motivos, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Surge del historial de la medida que el Senado incluyó a la Policía de Puerto Rico, o el negociado sucesor a ésta, como parte de las agencias autorizadas a formar parte de la promulgación de reglamentación que por ley se establezca con el fin de permitirle emitir alertas que garanticen la seguridad en eventos de emergencia que ésta atienda. Se dispone que las alertas deberán ser emitidas tanto en español como en inglés. También, se incluyeron varias alertas que, como mínimo, deberán estar contempladas en la reglamentación que se establezca tras la aprobación de la legislación:

- aquellas emitidas por agencias federales o a solicitud de éstas, a tenor con lo dispuesto en la Ley Federal conocida como el “Warning, Alert and Response Network Act” (WARN) o cualquier otro estatuto federal aplicable;
- alertas AMBER según lo dispuesto en la Ley Núm. 70-2008, conocida como la “Ley Habilitadora para Desarrollar el Plan AMBER”, y cualquier reglamentación aplicable;
- alertas SILVER según lo dispuesto en la Ley Núm. 132-2009, conocida como la “Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta SILVER”, y cualquier reglamentación aplicable;
- alertas emitidas por el Gobernador de Puerto Rico;
- alertas emitidas por la Policía de Puerto Rico o la agencia sucesora a ésta; y
- cualquier otra alerta que sea necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley¹.

En el P. de la C. 1103 se les ordena a las compañías proveedoras de telecomunicaciones que brinden servicios de telefonía móvil a crear un programa de servicio público de notificación de condiciones marítimas de peligro en las playas y zonas costeras de Puerto Rico. A tales fines estas alertas serán dirigidas a las unidades o teléfonos móviles. Se dispone que dicho mandato será obligatorio. Dichas alertas serán notificadas por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres, adscrita al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, siguiendo la información provista por el Servicio Nacional de Meteorología Federal.

Bajo ambas iniciativas de ley se faculta a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a formular toda la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de ley.

III.

La Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la *Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico*, fue aprobada con el propósito de promover cambios significativos en

¹ Véase el Informe Positivo de la Comisión de Gobierno del P. del S. 99 presentado el 22 de mayo de 2017.

los sistemas de recopilación de datos y estadísticas para asegurar su calidad, corrección, certeza y confiabilidad. Mediante dicha Ley se establece como política pública que los organismos gubernamentales y la ciudadanía en general cuente con un sistema de información económica y socialmente confiable, que se caracterice por la transparencia en la disponibilidad de los métodos utilizados, la periodicidad en la publicación y la accesibilidad de los datos. En el Artículo 3 de nuestra Ley Orgánica se dispone que *el Instituto tendrá la misión primordial de coordinar el Servicio de Producción de Estadísticas de los organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de requerir información, tanto al sector público como al privado, dentro de los parámetros definidos en esta Ley y de elaborar, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la política de desarrollo de la función pública estadística.*

A los fines de lograr los objetivos antes señalados, el Artículo 5 (a) de la Ley Núm. 209, citada, dispone que el Instituto establecerá criterios de calidad para los sistemas de recopilación de datos y estadísticas en las agencias gubernamentales, índices de desempeño, grado de confiabilidad de la información, adecuación y vigencia de los indicadores conforme con las necesidades de nuestro pueblo y los requerimientos de la economía moderna. En el ejercicio de esta autoridad el Instituto aprobó el Reglamento de los Criterios de Calidad de las Estadísticas². Los criterios adoptados serán utilizados para acreditar la calidad de las estadísticas de las entidades gubernamentales.

Por su parte, el Artículo 15 de la Ley Núm. 209, citada, crea el Comité de Coordinación de Estadísticas con las siguientes funciones: asegurar el flujo continuo de datos e información estadística de manera que se cumpla con lo establecido en esta Ley; dilucidar y resolver problemas relacionados con el flujo y el acceso a datos e información estadística que puedan afectar las labores de los organismos gubernamentales; resolver problemas de carácter técnico relacionados con la información estadística; coordinar actividades de información estadística que involucren a más de un organismo gubernamental; analizar problemas metodológicos de las unidades de estadísticas; servir de foro de primera instancia para dilucidar disputas relacionadas con métodos, procedimientos, datos y divulgación de información estadística, antes de llevarlas a la consideración del Instituto; entre otras responsabilidades.

Como se observa, con la aprobación de la Ley Núm. 209, citada se persigue el objetivo de asegurar que la ciudadanía y el Gobierno cuente con información estadística de forma oportuna y confiable, de manera que cada sector pueda contar con información correcta, adecuada y de calidad para la formulación de políticas públicas e iniciativas que contribuyan al desarrollo socioeconómico.

IV.

En las medidas bajo estudio se contemplan iniciativas de divulgación de información en caso de emergencia, un objetivo cónsono con la política pública que contempla nuestra Ley Habilitadora. El Instituto no tiene objeción legal que formular. Recomendamos que se le solicite la posición a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastre, a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, a la Policía de P.R., y a otras agencias estatales y federales que tiene jurisdicción y competencia sobre la materia objeto de legislación.

Confiamos que los comentarios que anteceden contribuyan al análisis de la medida ante la consideración de esta Honorable Comisión.

² Número 7586 de 14 de octubre de 2008.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. M. Marazzi-Santiago', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Dr. Mario Marazzi-Santiago
Director Ejecutivo